

Doctor

ÁLVARO CARREÑO VELANDIA

Juez 64 Administrativo de oralidad del circuito judicial de Bogotá

Sección Tercera

E.

S.

D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA 2020-00076-00

ACCIONANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

ACCIONADOS: MUNICIPIO DE GUACHENÉ -CAUCA- Y OTRO

SONIA MARINA CASTRO MORA, obrando en nombre y representación del Banco Agrario de Colombia, ante usted, respetuosamente y dentro de la oportunidad legal correspondiente para el efecto¹, impugno la sentencia de primera instancia proferida el pasado martes 31 de marzo de 2020, y notificada por vía electrónica ese mismo día.

La sentencia de primera instancia desestimó los argumentos de la solicitud de tutela, sin estudiarla de fondo, por las siguientes razones:

Primero, el juez de la primera instancia estimó que la solicitud implicaba la suspensión de la Resolución No. 005 de 2020 expedida por el municipio de Guachené - Cauca. **Segundo**, y aunado a lo anterior, concluyó que el Banco contaba con otros mecanismos de defensa judicial -incluida la solicitud de medidas cautelares de urgencia- y administrativos. **Y finalmente**, indicó que con la solicitud de tutela no se había acreditado la materialización de un perjuicio irremediable.

Con total respeto por las conclusiones del juez de primera instancia debo apartarme de ellas por las siguientes y evidentes razones.

Frente al **primero** de los argumentos en los que se fundamentó la *ratio decidendi* del fallo de primera instancia, es decir el relativo a la supuesta solicitud de suspensión de actos administrativos, lo cierto es que la petición de amparo, en absoluto, pretende que algún acto administrativo se suspenda, **de hecho, los actos administrativos que dieron origen a esta controversia ya se encuentran suspendidos**, e incluso anulados en primera instancia por las autoridades competentes, la complejidad radica en que incluso siendo esto así, el Municipio de Guachené persiste en su ejecución, a través de actuaciones que constituyen unas verdaderas vías de hecho. Veamos:

¹ De conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado, entre otros, por el solicitante, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303

Bogotá D.C. - Colombia

Tel: 3208517046

E-mail: soniamarinac@gmail.com

Como es sabido, el Banco Agrario de Colombia, es un mero tenedor de los títulos depósito judicial constituidos para los dineros embargados a los sujetos pasivos de los procesos ejecutivos y de jurisdicción coactiva en todo el país.

En el marco de esta actividad, y en específico tratándose de los proceso de jurisdicción coactiva, el Banco debe acatar tanto las decisiones judiciales, así como las directrices de las autoridades competentes al momento de entregar a las entidades ejecutoras tales dineros.

Ante el Tribunal Administrativo del Cauca, cursan dos demandas de nulidad y restablecimiento del derecho que fueron acumuladas en un mismo proceso, i) en contra de los actos administrativos expedidos por el municipio de Guachené – Cauca, que liquidaron y realizaron el aforo del impuesto de industria y comercio a la sociedad Familias del Pacífico S.A.S. (radicado 190012333003-2018-00032-00) y ii) en contra del mandamiento de pago y la resolución que resuelve las excepciones propuestas en contra del mismo (radicado 190012333005-2018-00245-00). En ese proceso, el pasado 3 de febrero de 2020 se profirió auto de suspensión provisional de todos los actos administrativos demandados y que permiten el cobro de la obligación tributaria a la sociedad Familias del Pacífico S.A.S. y se ordena expresamente al Banco Agrario de Colombia sobre los dineros que tiene en los títulos ejecutivos, que **“se abstenga de efectuar la entrega de los dineros al municipio de Guachené Cauca”**. Esta providencia se encuentra en firme.

Igualmente y de manera posterior, el Tribunal profirió sentencia de primera instancia de fecha 13 de febrero de 2020, declarando la nulidad de todos los actos administrativos demandados por considerarlos abiertamente ilegales. Esta sentencia fue apelada y se encuentra en trámite la segunda instancia, con la decisión en firme de suspensión provisional de los mismos actos.

Por lo anterior, en el caso concreto el Banco Agrario de Colombia, en acatamiento de las directrices impartidas primero por la Procuraduría General de la Nación² y luego por orden expresa del Tribunal Administrativo del Cauca³, se abstuvo de entregar los dineros producto de los embargos realizado a la sociedad Productos Familia S.A. en su calidad de deudor solidario

² A través de los oficio de fecha 06 de agosto de 2019, del 09 de diciembre de 2019 No. 1977 y del 05 de febrero de 2020 No. 00111 de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia administrativa.

³ El auto de fecha 3 de febrero de 2020 que se encuentra debidamente ejecutoriado, suspende provisionalmente los actos administrativos que sirvieron de fundamento para iniciar el procedimiento de cobro coactivo e indica expresamente que “El apoderado de la parte actora informará de esta decisión a las entidades a quienes se les comunicó el embargo, en especial al Banco Agrario y a Bancolombia, que se sabe lo hicieron efectivo, advirtiéndoles que se abstengan de efectuar la entrega de los dineros al municipio de Guachené, Cauca.”

de la sociedad Familias del Pacífico S.A.S. en el marco del proceso de jurisdicción coactiva adelantado por el municipio de Guachené – Cauca contra esta última.

En una clara actuación aribraria que sin más representa una vía de hecho, el municipio de Guachené - Cauca para poder cobrar LA MISMA DEUDA ya objeto de proceso de jurisdicción coactiva contra las Sociedades Familias del Pacífico S.A.S y Productos Familia S.A. –cuyos actos administrativos están suspendidos por orden judicial- procedió a través de la Resolución No. 005 del 27 de enero de 2020, a declarar la solidaridad de una “deuda” al Banco Agrario de Colombia.

Es decir, a través de esta Resolución el municipio declara como deudor solidario de la misma deuda de Familias del Pacífico S.A.S. al Banco Agrario de Colombia, por ser el tenedor de unos depósitos judiciales productos de los embargos ejecutados en un proceso de jurisdicción coactiva cuyos actos están suspendidos por la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de cobrar esa misma deuda en otro proceso de jurisdicción coactiva.

Pues bien, en esta vía de hecho contenida en la Resolución No. 005 de 2020, el municipio accionado liquidó la deuda en contra del Banco Agrario de Colombia en un monto que supera los 42 mil millones de pesos y que como lo ha reconocido en su escrito de contestación de la tutela, está en proceso de cobro persuasivo para posteriormente ejecutar a través de un proceso de jurisdicción coactiva en contra de la entidad financiera que represento.

Es decir, el haber cumplido las directrices de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y la orden expresa del Tribunal Administrativo del Cauca y haberse abstenido de entregar al municipio hoy accionado los dineros embargados por cuenta de un proceso de jurisdicción coactiva completamente ajeno al Banco, ha generado inexplicable y arbitrariamente una declaratoria de solidaridad para mi representado que no encuentra fundamento en norma alguna de nuestro ordenamiento jurídico y que lo sitúa como sujeto pasivo de un proceso coactivo en su contra, que actualmente se halla en etapa de cobro persuasivo.

Esta situación es tan absurda, que de continuarse con la ejecución en contra del Banco Agrario de Colombia, resultaría este, con su patrimonio público, pagando una deuda de impuestos que le correspondería eventualmene a un particular, es decir a la sociedad Familias del Pacífico S.A.S; deuda que además está contenida en unos actos administrativos anulados en sentencia de primera instancia y suspendidos provisionalmente.

El municipio de Guachené – Cauca, en una actuación que rebasa por completo su competencia, esgrime en la Resolución No. 005 de 2020, falaces e ininteligibles argumentos

*Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3208517046
E-mail: soniamarinac@gmail.com*

sobre una supuesta responsabilidad contractual como secuestre (¿?) y declara al Banco Agrario solidario de una obligación tributaria con base en el parágrafo 3 del artículo 839-1 del Estatuto Tributario que establece:

PARAGRAFO 3o. Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación.

El Banco que represento es un mero tenedor de los dineros embargados, JAMÁS HA RECIBIDO ÓRDENES DE EMBARGO de parte del municipio de Guachené, por tanto, JAMÁS SE HA NEGADO A CUMPLIR ÓRDENES DE EMBARGO, pues reitero, es un mero tenedor de los depósitos judiciales que se han constituido a partir de los embargos realizados por las entidades financieras y las diferentes personas que si recibieron tal orden por parte de la entidad territorial.

Por tanto, la aplicación de la norma de solidaridad referida del Estatuto Tributario es francamente una grosera arbitrariedad, un atropello conciente de una autoridad pública hacia mi representado, que no puede ser menos que una vía de hecho.

Huelga manifestar que la arbitrariedad en la Declaración de solidaridad del Banco que represento por parte del municipio accionado, se hace más que evidente al contrastarla con el artículo 1568 del Código Civil, que establece que la solidaridad solo es posible por virtud del convenio o contrato, del testamento o de la ley⁴, circunstancias que ni por sombra se presentan en el presente caso, pues no existe fundamento legal para la solidaridad del Banco como tenedor de unos dineros embargados, ni tampoco, mi representado ha suscrito un contrato con los deudores principales en virtud del cual pueda derivarse la solidaridad pretendida.

Sin existir causa para la declaratoria de solidaridad, este acto es una vía de hecho que violenta de manera grave y flagrante el derecho fundamental de mi representado y que se solicita de manera especial sea amparado, pues lo que el municipio pretende es obtener DE INMEDIATO y por esta vía, embargar y sustraer para si los dineros públicos del Banco Agrario, al no haber podido obtenerlos en el proceso de jurisdicción coactiva suspendido por

⁴ "En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse, a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o *in solidum*"
(subrayas y resaltado mío)

Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3208517046
E-mail: soniamarinac@gmail.com

la jurisdicción contencioso administrativa. Para ello, la entidad territorial construye una nueva actuación ahora en contra del Banco Agrario de Colombia, alejada del derecho y basada en la figura exótica y absurda de una solidaridad que parece sacada como de un cubilete mágico.

Reitero que es tan grave y tan inaudita es esta situación, que de permitirse que se siga un procedimiento de cobro y ejecución en contra del Banco Agrario de Colombia, terminaría una entidad pública tan importante y tan crucial en la economía agrícola del país, con su patrimonio público, pagando una deuda de impuestos que le correspondería eventualmene a un particular, es decir a la sociedad Familias del Pacífico S.A.S; deuda que además está contenida en unos actos administrativos que fueron anulados en sentencia de primera instancia y que se encuentran suspendidos provisionalmente.

Por todo lo anterior, se torna ligera y carente de un verdadero análisis, la apreciación del Juez de primera instancia sobre la imposibilidad de que el juez de tutela en este caso, pueda pronunciarse sobre la continuidad del procedimiento de cobro que adelanta el municipio de Guachené en contra de mi representado.

Sobre la existencia de otros mecanismos de defensa judicial y administrativa

Ahora bien, el **segundo argumento** que fundamenta la decisión del aquo tiene que ver con la existencia de otros medios de defensa para atacar el acto a través del cual se ha violado de manera flagrante el debido proceso a mi representado. Explica la decisión de primera instancia que *“la parte actora, no solamente cuenta con mecanismos judiciales, sino también en sede administrativa, toda vez que dentro del proceso coactivo puede formular las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario, que establece: (...)”* y menciona seguidamente las excepciones que proceden contra el mandamiento de pago.

Indica también que actualmente se encuentra en trámite el recurso en contra de la Resolución que declara al Banco deudor solidario y que en caso de no obtener una decisión favorable, es procedente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con solicitud de medida de urgencia ante la jurisdicción contencioso administrativa

Pues bien, es preciso indicar que en ningún momento se pretende desconocer la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para atacar la actuación irregular del municipio accionado, sino que es evidente la falta de eficacia de los mismos a la hora de proteger el debido proceso y por ende salvaguardar los recursos públicos que maneja el Banco.

Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3208517046
E-mail: soniamarinac@gmail.com

En primer lugar, es importante mencionar que la improcedencia de la Tutela de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,⁵ se refiere a la existencia de otros medios de defensa judiciales que puedan proteger de manera idónea los derechos del tutelante. Así, frente a las objeción del A quo por existir ante la misma administración el recurso administrativo de reconsideración que está siendo tramitado, no es suficiente para desestimar la procedencia de la misma.

Lo anterior, en virtud a que el municipio de Guachené, en uso de sus facultades exorbitantes, de manera unilateral ha expedido la Resolución No. 005 de 2020, la cual sin fundamento jurídico alguno declara en contra del Banco que represento la solidaridad de una deuda y en donde según su propio dicho, hoy adelanta un proceso de cobro persuasivo de esta obligación, para posteriormente y de manera también unilateral, proceder a ejecutar su misma arbitrariedad a través del procedimiento de cobro coactivo en el cual, también con la posibilidad de la exorbitancia, puede decretar medidas cautelares como embargos, que se practican aun antes de que puedan activarse los controles jurisdiccionales que procederían al efecto.

Es que en el caso concreto, no puede olvidarse, como parece haberlo hecho el A quo, que el accionante se encuentra en completa indefensión de su derecho fundamental, ante la misma autoridad que mediante una vía de hecho ha realizado una absurda declaración de solidaridad, trayendo argumentos falaces y descabellados para fundamentar su decisión. Y además, no se trata de una actuación cualquiera de la administración, sino del ejercicio de las facultades de cobro coactivo, en donde por su misma naturaleza, es la misma autoridad la que liquida las deudas a su favor, la que libra el mandamiento de pago y la que emite y ejecuta las medidas cautelares como los embargos, los cuales son practicados de manera inmediata, sin la posibilidad de que el juez competente pueda pronunciarse con antelación a la ejecución de dichas cautelas, sobre la legalidad de los actos, ni siquiera sobre cualquier medida de urgencia o de suspensión provisional solicitada.

No se trata como lo ha entendido el Juez A quo, que el accionante quiera culpar a la mora judicial de la ineficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que procedería en este caso. NO. Se trata de entender que el procedimiento en el cual está siendo

⁵ ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (Subrayas fuera de texto)

vulnerado el derecho fundamental a mi mandante, es un procedimiento de cobro coactivo que por su naturaleza, logra la ejecución de las medidas cautelares decretadas por la misma administración de manera inminente y anterior a la posibilidad aún de demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa.

No en vano por ejemplo, el Estatuto Tributario dispone en el artículo 837 que previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario de la entidad ejecutora podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. Y en el parágrafo de esta misma disposición se indica que *“Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas.”*.

Este procedimiento así diseñado, se entiende razonable cuando la autoridad administrativa, respetuosa de los derechos de los sujetos pasivos del cobro coactivo, es responsable a la hora de aplicar las normas que rigen las obligaciones que declara y así mismo la persecución de los bienes mediante las medidas cautelares es también proporcionada y ajustada a la ley. Sin embargo, ante una vía de hecho como la descrita, en donde se declara una solidaridad a quien es mero tenedor de unos depósitos judiciales y quien además ha recibido la orden judicial de NO HACER ENTREGA DE LOS MISMOS, el desconocimiento de las normas que rigen las obligaciones y las facultades coactivas, es craso y por tanto resulta inminente el menoscabo y la trasgresión de los derechos del Banco que represento y se tornan absolutamente ineficaces los recursos administrativos procedentes.

Ahora bien, frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin bien es cierto que procede para atacar la legalidad de las arbitrarias actuaciones de la administración, como ya se indicó resulta ineficaz al momento de precaver el daño que se pretende evitar con la presente acción de tutela: el embargo al Banco Agrario de Colombia de más de 42 mil millones de pesos, recursos estos que por cuenta de una vía de hecho quedarían en el mejor de los casos, congelados en las cuentas de los bancos que ejecutan materialmente la medida y en el peor de los escenarios, en las cuentas del Municipio accionado en donde irremediablemente el dinero será gastado y su recuperación no va a ser posible posteriormente.

El a quo, en mi criterio, equivocadamente concluye que existe un medio de defensa idóneo para proteger los derechos conculcados, al expresar sin razón:

“Ahora bien, frente a esta última actuación adelantada contra el Banco Agrario de Colombia S.A. –se refiere a la Resolución No. 005 de 2020- de conformidad con lo

Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3208517046
E-mail: soniamarinac@gmail.com

establecido en los artículos 229 y ss. de la Ley 1437 de 2011, la parte actora en caso de obtener una decisión adversa, puede solicitar igualmente la nulidad del acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración formulado, y solicitar medidas cautelares.

De igual forma, ha de tenerse en consideración que el juez contencioso se encuentra facultado para decretar de urgencia las medidas cautelares que considere pertinentes, en cumplimiento del art. 234 de la Ley 1437 de 2011.

Considera el Despacho que, frente a esta última actuación la parte actora cuenta con mecanismos judiciales para hacer valer sus derechos, no siendo la acción de tutela la acción idónea.”

Olvida esta postura que en el momento en que queda en firme la declaración de la deuda al haberse desatado el recurso de reconsideración, la entidad ejecutora puede librar mandamiento de pago y de manera previa o simultánea podrá decretar las medidas cautelares que considere para perseguir los bienes de su deudor. Es decir, para el momento en que se interponga la demanda, así sea inmediatamente después de haberse resuelto el recurso de reconsideración, existe el inminente peligro de que se practique el embargo que causa todo el grave daño que se suplica en la presente acción de tutela evitar: que se sustraigan más de 42 mil millones del Banco Agrario de Colombia por cuenta de la medida de embargo decretada por el municipio de Guachené – Cauca en el marco de un proceso de jurisdicción coactiva que tiene como causa una flagrante vía de hecho.

Y ni que hablar de la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos administrativos que contienen el mandamiento de pago y la resolución de las excepciones propuesta contra este, que aunque posible y en el caso que sea adversa la decisión así lo hará mi representado, se torna totalmente ineficaz para proteger el derecho fundamental conculcado y evitar el perjuicio, pues estos actos son también posteriores al decreto y ejecución de las medidas cautelares (embargos).

Ahora bien, para hacer más gravoso el perjuicio que causa todo lo descrito, es necesario tener en cuenta que en la actual coyuntura del país no sería posible interponer una demanda ordinaria ante la jurisdicción contencioso administrativa, por el hecho conocido de la suspensión de los términos judiciales a raíz de la Declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Gobierno Nacional. Como lo ha informado el mismo Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura, la suspensión de los términos procesales es una medida tomada en principio hasta el próximo 13 de abril, que tiene la posibilidad de prorrogarse de acuerdo con la evolución de la pandemia originada por el virus Covid-19. En este escenario y sin haber el

Carrera 9 No. 81 A - 26 Oficina 303
Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3208517046
E-mail: soniamarinac@gmail.com

municipio de Guachené oficializado por medio alguno a la fecha, la suspensión de los términos en sus actuaciones, es natural que el curso de los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo avancen en la entidad territorial, mientras existe la imposibilidad actual de demandar los actos que se produzcan.

Sobre el perjuicio irremediable

Por todo lo anterior, de bulto resulta el perjuicio irremediable que se causaría, si en esta instancia de tutela no se interviene con el fin de que se impida seguir con la ejecución de una vía de hecho como la declaración de solidaridad de una deuda al Banco Agrario de Colombia.

Con todo lo anterior, las conclusiones del Juez de primera instancia sobre el perjuicio irremediable no son acertadas. Al efecto, se lee en la sentencia impugnada:

“Ahora bien, con relación al perjuicio irremediable que hizo consistir la parte en que el Banco Agrario de Colombia tiene un patrimonio público y en caso de que el Municipio insista en obtener dineros, a los que según su parecer, no tiene derecho, se configura un perjuicio irremediable; considera el Despacho que no se advierte dicha configuración toda vez que en el plenario no se acredita, se demuestra ni prueba una amenaza inminente, grave y urgente, que conlleve la adopción de medidas de protección que hagan procedente la presente acción constitucional.”

La inminencia, como se ha definido por la Jurisprudencia constitucional, consiste en “que amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética (...). Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.”⁶

En el caso concreto, como se ha expuesto a lo largo de este escrito y en la demanda de tutela, el daño que se pretende evitar, no se deriva de una mera conjetura hipotética; se deriva de evidencias fácticas concretas: la vía de hecho contenida en la Resolución No. 005 de 2020 del municipio de Guachené - Cauca que sin fundamento legal alguno declara la solidaridad de una deuda al Banco Agrario de Colombia por ser el tenedor de unos depósitos judiciales y la posibilidad de que aún antes de poder iniciar el Banco un proceso ordinario ante la jurisdicción

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

contencioso administrativa, se libre mandamiento de pago y se decreten los embargos en su contra. Agravado lo anterior, con las actuales circunstancias en las que no es posible interponer las demandas correspondientes ante la jurisdicción contencioso administrativa y a la par, el municipio no ha informado de la suspensión de los términos de sus procedimientos de cobro persuasivo o coactivo.

Si no hay una intervención hoy del juez de tutela que declare la inexistencia de la absurda solidaridad de la deuda en contra del Banco que represento, o que en su defecto y de manera transitoria mientras el juez contencioso administrativo puede declarar la nulidad de esta vía de hecho, evite el decreto y la ejecución cualquier medida cautelar de embargo en contra del accionante, el curso natural que tomará la actuación del Municipio será irremediablemente el embargo de los cuantiosos dineros públicos del Banco Agrario de Colombia.

Sobre la urgencia, la misma jurisprudencia ha establecido que es necesario que las medidas para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes, es decir que *“hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia.”*⁷

En el caso concreto, la respuesta al inminente embargo de los bienes del Banco Agrario de Colombia por parte del municipio de Guachené - Cauca, es la intervención del juez de tutela que detenga ese desenlace fatal a través de la orden de desvincular al Banco de dichos procesos en su contra o en su defecto, como medida transitoria suspenda cualquier medida de embargo, mientras se puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y lograr un pronunciamiento sobre la legalidad de estos.

Por último, el daño ha de ser grave *“No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la*

⁷ Ibídem

*gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.*⁸

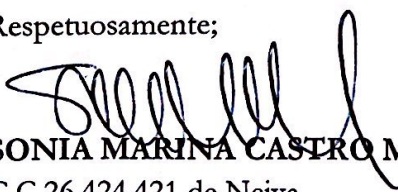
Al respecto del daño, me permito además de lo descrito en la acción de tutela sobre la gravedad de que al único banco público que financia el agro colombiano le sean sustraídos de su patrimonio y por tanto de su operación líquida la suma de \$42.139.104.000.00, realizar una consideración especial sobre las actuales circunstancias por las que atraviesa el país y el papel crucial del Banco en la ejecución de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el marco del estado de Emergencia declarado.

Si se sustraen del Banco Agrario de Colombia, por cuenta de los embargos decretados por el Municipio de Guachené, los más de 42 mil millones de pesos, no solo pone en riesgo la política actual que soporta por ejemplo la financiación y las ayudas a la economía más golpeada con las medidas de cuarentena, sino que ello comprometería la estabilidad misma como institución financiera, con las implicaciones públicas que trae el hecho de ser el Banco de todos los colombianos.

Por todo lo expuesto, solicito al Tribunal Administrativo de Cundinamarca

- i) Que revoque la sentencia de primera instancia proferida dentro del presente proceso y en su lugar, conceda el amparo solicitado, ordenando al municipio de Guachené – Cauca, la desvinculación inmediata del Banco Agrario de Colombia, como deudor solidario, situación realizada a través de la Resolución No. 005 de 2020.
- ii) De manera subsidiaria, y si el honorable Tribunal no accede a la anterior solicitud, solicito que transitoriamente se ordene al municipio de Guachené – Cauca, se abstenga de decretar y ejecutar cualquier medida de embargo contra los bienes del Banco Agrario de Colombia.

Respetuosamente;


SONIA MARINA CASTRO MORA
C.C.26.424.421 de Neiva
T.P. 180.253 del C.S. de la J.

⁸ Ibidem